

“Políticos estrechos de mente que sólo buscan el poder pueden quizás imponerse aislada y transitoriamente con su demagogia, pero el clamor creciente por una nueva y más profunda democratización de la vida social ya no puede ser reprimido.” Ota Sik

¿Cómo puede construirse un Estado que permita una auténtica democracia, en la que no sólo esté democratizada en forma creíble la lucha política, sino también la economía, y en el que pueda tener confianza no sólo el capital, sino el pueblo entero?

“La *volonté générale* debe surgir, según Rousseau, de la asamblea popular, de la cual todos y todas pueden formar parte en la forma de un plebiscito permanente. En el Estado, el Poder Ejecutivo debe someterse a la voluntad de la asamblea popular. La soberanía del pueblo, que debe expresarse en esta reunión, es para Rousseau la garantía de la existencia real de libertad e igualdad en el Estado”. (Orías 2007: 188-190) Rousseau no se limita a proclamar la igualdad y libertad políticas de las personas. Es importante para él la realización viviente y completa de estos ideales en el Estado (op.cit.: 202-203).

Ciertamente hoy en día, debido al aumento vertiginoso de la población, la “voluntad general” sólo puede realizarse mediante la representación de las masas populares en parlamentos u otras formas de consejos. No menos cierto es que, por el mismo motivo, las formas de democracia directa, tal como existen todavía en algunos pequeños cantones suizos donde cada individuo puede manifestar su propia voluntad, ceden cada vez más lugar a los medios electrónicos de consulta popular – una evolución lógica si consideramos los múltiples progresos y posibilidades de Internet. A pesar de todo eso, no podemos dejar de considerar el postulado de Rousseau como punto central de la cultura política.

Recién cuando existan reales condiciones de igualdad y libertad, el individuo podrá sentir confianza en el Estado. Por el contrario, mientras el Estado pueda ser considerado por los empresarios como un bombero que acude cuando lo necesitan, como la “última instancia” que los saca de apuros con acciones de salvataje (*bail out*), programas de rescate y recurrentes créditos de reactivación a costa de la comunidad, o sea, del contribuyente, este Estado no puede despertar verdadera confianza, ya que permite que se abusen de él como si fuera una vaca lechera que se puede ordeñar a placer, siempre y cuando los que lo hagan pertenezcan a la clase privilegiada que vive a costillas de todo el resto de la sociedad.

El proyecto de la economía solidaria tiene como meta superar, si bien no todas, pero sí las diferencias de clase más extremas, las éticamente insostenibles. En mi opinión, este sistema debe estar dirigido a garantizar el abastecimiento de todos los alimentos de la canasta básica a precios razonables, el acceso a una educación y formación profesional libre de costos unido a determinadas exigencias de eficiencia, el acceso a una cobertura de salud gratuita con un

seguro básico del Estado (que debería orientarse preferentemente hacia el modelo danés) y el goce de una jubilación digna en la vejez.

El Estado solidario debe entenderse como una institución influyente, obligada a que la preocupación por el bienestar general sea su primer mandamiento. Al mismo tiempo deja suficiente espacio de acción para el despliegue de las fuerzas creativas del individuo, de las empresas tanto de tipo familiar como las organizadas en forma cooperativa, de las pequeñas y medianas sociedades anónimas, en tanto éstas otorguen a todo su personal y a la ciudadanía (siempre que se trate de *stakeholders*, es decir, de clientes y otras personas e instituciones involucradas) derechos amplios a la información empresarial interna, a tomar parte en las decisiones, a la cogestión paritaria y a la participación económica. En caso de que surjan situaciones de empate como consecuencia de la representación paritaria, una persona representante de la comunidad, comprometida con los principios de la solidaridad –y no con ciertos intereses privados– deberá ser el fiel de la balanza.

El surgimiento de formaciones económicas monstruosas, tales como la mayoría de las corporaciones y grandes bancos en la actualidad, debe ser evitada en el futuro. Un camino para impedir semejantes procesos de crecimiento excesivo puede ser la división, tal como piden cada vez más expertos razonables y renombrados. Otra salida posible es el traspaso parcial o total de los bienes al patrimonio de interés público, en el que generalmente habría que compensar a los actuales propietarios con indemnizaciones adecuadas. El tercer camino, a mi parecer, el más lógico, es la política impositiva. Ella puede y debe estar formulada en concordancia con el objetivo de eliminar las fuentes de todos los males del desarrollo capitalista, el gigantismo y el monopolio, sin estrangular la actividad económica privada.

De acuerdo con la concepción marxista ortodoxa, para la instauración de un régimen socialista tiene que estar dada una serie de condiciones: la toma del poder bajo dirección de la clase trabajadora, la destrucción del aparato productivo capitalista, democracia para los partidarios y dictadura para los adversarios, derecho al trabajo para todos los capacitados para ello, planificación económica con el objeto de satisfacer las necesidades básicas, salario acorde al trabajo y eliminación de cualquier otro ingreso, control de los trabajadores sobre el proceso de producción, lucha contra remanentes burgueses como la discriminación de sexos y razas, educación y formación universal y la creación de una nueva conciencia socialista sobre las bases de justicia y solidaridad (Harris 1992: 23).

Marx y Engels aconsejaron además en su “Crítica al programa de Gotha”, la instauración de una milicia armada, la expropiación de los bienes materiales de todas las iglesias, elecciones directas y universales (también de empleados públicos y jueces), elección y, de ser necesario, revocación de empleados municipales, autogestión comunal y educación libre y laica. Engels advirtió categóricamente contra una igualación entre socialización y estatización (op.cit.: 25f.).

Oscar Lange, economista polaco y uno de los más importantes ideólogos del marxismo detrás de sus padres fundadores, se dio cuenta a fines de la década de 1930, que la resistencia pasiva y el sabotaje de los enemigos de la Revolución no podían ser superados únicamente con

vigilancia y que, en consecuencia, un avance gradual en la instauración de un gobierno socialista estaba condenado al fracaso en la práctica. “El socialismo no es una política económica para irresolutos”, sentenció (citado en: Harris 1992: 57). Pero Lange aconsejó igualmente conceder a los pequeños productores las garantías necesarias para su desenvolvimiento económico a fin de ganar su apoyo contra el gran capital, los monopolios y el imperialismo.

Siguiendo a Harris, en Rusia la Revolución tuvo que fracasar como proyecto socialista-democrático, “porque la clase trabajadora era allí una pequeña minoría de la población y la mayoría predominante estaba compuesta por campesinos de mentalidad pequeño-burguesa (y) porque en la mentalidad de Lenin y también en la del Partido Bolchevique imperaban pretensiones de autoridad absolutamente elitistas” (op.cit.: 30). Al cabo de setenta años, finalmente este régimen fracasó. En Cuba, el Partido Comunista intenta evitar desde hace varias décadas un derrumbe del gobierno socialista mediante una política reformista, al principio, dubitativa y contradictoria; luego, un poco más audaz.

De este catálogo marxista para la toma del poder, algunos puntos pueden ser realistas y útiles. Otros, que tienen como objetivo la instauración de una dictadura de determinado tipo, deben ser desechados rotundamente. Pero queda claro, que a los luchadores por un sistema solidario y democrático se les planteará la cuestión del poder, la cuestión acerca de quién tendrá la última palabra en el nuevo Estado. Sin duda alguna, el poder verdadero y duradero sólo puede asentarse en la consulta permanente de la voluntad mayoritaria del pueblo. Esto requiere un montón de mecanismos de participación –codecisión plebiscitaria constante, tal como ya existe, por ejemplo en Suiza, en principio también en Uruguay y, bajo diferentes circunstancias históricas, en Cuba y Venezuela.

De la cuestión acerca de quién manda en el Estado, se ocupó de manera sobre todo práctica el que, en mi opinión, fue el más creíble de todos los presidentes de la Revolución Mexicana, el general Lázaro Cárdenas, que llegó al poder por el voto popular (1934-1940). Sus predecesores, que habían asumido el gobierno bajo diferentes circunstancias durante y después de la Revolución extremadamente sangrienta (entre 1910 y 1920), sin excepción partieron de la base de que las fuerzas burguesas y conservadoras debían mantener la prevalencia en el Estado aun después del “triumfo” de la Revolución (siendo ellos mismos además auténticos representantes de esa burguesía). Cárdenas, en cambio, impuso pautas totalmente nuevas. Esta experiencia política es objeto de un destacable estudio publicado por una editorial en Argentina bajo la supervisión de “Le Monde diplomatique” (Aibar 2009).

Como primer Jefe del Estado mexicano, el general se ocupó insistentemente de desplegar el espíritu cooperativista de Emiliano Zapata entre los campesinos (op.cit.: 94f.) y de integrar a estos a su proyecto político (107f., 114). Bajo su dirección, el Estado asumió el rol de un “verdadero conductor de masas”, que puso “el aparato burocrático al servicio de los objetivos de la Revolución” (128). También se incluyó al Ejército en los planes de un desarrollo integral de la Revolución (129). Frente al capital extranjero –y especialmente frente a las transnacionales del negocio petrolero– impuso una política dirigida a preservar los auténticos intereses de la Nación (132-140), sin dejarse apartar del camino de reformas radicales por la creciente oposición burguesa.

Como se expuso en el capítulo 3, uno de los problemas más grandes de la Revolución consiste en que la escasez de personal directivo idóneo retarda o hasta bloquea el proceso de socialización. En el gobierno de Cárdenas obviamente no hubo que romperse la cabeza por eso, porque el presidente gozaba de semejante prestigio, también en círculos académicos, y de un respaldo del pueblo tan amplio, que este problema no se le presentó y si lo hizo, fue en relativamente pequeña medida.

Muy diferente fue la situación que enfrentó Fidel Castro después de la Revolución de 1959. Quizá contra intenciones originales, el debió nacionalizar importantes sectores de la economía –en concordancia con la receta de Lange– para romper el poder de capitalistas locales y norteamericanos. Dos décadas más tarde, el jefe revolucionario se vio apremiado a desaconsejar a los camaradas nicaragüenses del FSLN de estatizar porciones de la economía demasiado grandes. Debían preocuparse mucho más por trazar a tiempo límites precisos entre los sectores público, cooperativo y privado y establecer claras relaciones en los tres.

Tampoco se puede soslayar el peligro de desarrollos fallidos como se observan en la construcción del Poder Popular en Cuba y, nuevamente una generación más tarde, en Venezuela. En relación a proyectos políticos orientados hacia el socialismo, Azzellini (2010: 158) remite al peligro de la integración de ciudadanos comunes en estructuras estatales burocráticas sin ofrecerles suficientes posibilidades de coparticipación y codecisión. Este autor demuestra, por otro lado, mediante múltiples y reveladores detalles, las tendencias, en general mayoritariamente positivas, en la formación de consejos comunales y organizaciones de base en Venezuela (op.cit.: 271ff., 350-361). En América Latina, luego de la Revolución Cubana y también de otros regímenes de evidente orientación izquierdista, se ha impuesto la visión de que la sociedad, con políticas marxistas va a parar a un callejón sin salida. Conocidos y localmente influyentes adherentes a un cambio radical en el Chile de la Unidad Popular como Carlos Altamirano, Theotonio dos Santos, Pedro Vuskovic y Sergio Bitar opinan hoy –en contraposición a entonces– que una profunda transformación política, económica y social sólo es posible en el marco de una creciente democratización.

La Unidad Popular chilena no entendió en ese entonces que debía convencer a la mayoría de la población de sus intenciones democráticas. Grupos más radicalizados pidieron un plebiscito para la disolución del Congreso y la elección de una Asamblea Popular. Salvador Allende, una parte de los socialistas, la mayoría del PC y los radicales burgueses sostuvieron la opinión que las fuerzas izquierdistas no estaban preparadas para una confrontación con la burguesía y el Ejército. Por eso ellos defendieron una estrategia paulatina. Parecidamente argumentaba una parte del FSLN (sobre todo Jaime Wheelock, uno de los nueve comandantes, y Sergio Ramírez como representante de grupos civiles) a mediados de la década de 1980 en Nicaragua. Socializaciones precipitadas, así exhortaba Wheelock a sus camaradas de armas, conducirían a un derrumbe de la economía. Una línea cautelosa en este sentido, siguieron también Shafik Handal como representante del PC y Joaquín Villalobos, comandante del FMLN, en el vecino El Salvador.

El mismo Harris, norteamericano de convicciones de izquierda que saltan a la vista, no se cansa de subrayar la importancia de teoría y práctica democráticas en la concreción de proyectos socialistas (Harris 1993:31f.). En caso de faltar, una burocratización del aparato del

poder sería inevitable. Los burócratas tendrían, a pesar de todo, siempre intereses propios y se empeñarían constantemente por evitar los controles democráticos, aun bajo un régimen socialista.

En Venezuela, otras parecen ser las condiciones para reformas radicales, ya que desembocan en un fortalecimiento de reformas económicas solidarias y de las fuerzas democráticas de base. Bajo el presidente Hugo Chávez, un ex oficial de las Fuerzas Armadas, la cuestión del poder se colocó hasta ahora bajo otra luz. Como en el seno de la institución militar las diferentes facciones se neutralizan mutuamente o rehúyen una confrontación política abierta por razones históricas, este aspecto de la cuestión del poder no fue evidentemente un problema apremiante, por lo menos hasta la irrupción de los serios problemas de salud del Jefe de Estado en el año 2011.

En otros países del grupo ALBA, conducido por Venezuela y Cuba, estas condiciones se presentan un poco más inestables, sobre todo en Ecuador, cuyo presidente Rafael Correa se vio urgido a una cierta moderación debido a la inquietud en círculos uniformados. Por otra parte en Nicaragua, si bien el FSLN pudo volver al poder en 2007 gracias a una alianza electoral oportunista, cultiva sin embargo, como se ha mencionado, con el presidente Daniel Ortega un estilo de gobierno más autoritario que democrático.

El Jefe de Estado de Venezuela preparó su intento de democratizar la economía y de sentar las bases para la instauración de un “Socialismo del siglo XXI” por medio de la convocatoria a una Asamblea Constituyente a través de una elección popular y la redacción de una nueva Ley Fundamental. Quizá sin saberlo, él siguió el consejo de Rousseau de sondear la *volonté générale* y de dar la oportunidad a todos los sectores de la población a expresar su opinión y su aprobación para un nuevo proyecto social. El ejemplo de Chávez fue seguido poco tiempo después por los nuevos presidentes, también elegidos democráticamente, de Bolivia y Ecuador con resultado diverso. El presidente Evo Morales perseguía sobre todo la idea de colocar a la mayoría indígena de su país en el centro de sus planes políticos; su colega Correa en Ecuador aspiraba a una reforma relativamente radical, pero de todas formas más bien burguesa de Estado, economía y sociedad.

La instauración y el fomento sistemático de cooperativas son pasos importantes para la modificación del balance del poder. El filósofo Bunge se ocupa detenidamente de esta forma de administrar los negocios y menciona un sinnúmero de ejemplos exitosos (Bunge 2009: 171-172, 372-382). También Wallenstein destaca las ventajas de cooperativas de utilidad pública, también, por cierto, en la asistencia sanitaria (2002: 86f.). Él ve en ello un cúmulo de incentivos para la eficiencia y la posibilidad realista de evitar tanto una centralización dañina en el aparato estatal como también la desidia burocrática en el seno mismo de la cooperativa. Importantes referencias y ejemplos pueden encontrarse también en Kissling (2008: 91-06), así como en Wilkinson y Pickett (2010: 287-291). Estos últimos se ocupan insistentemente de las ventajas de que los trabajadores tengan la posesión y participen activamente en la administración de las empresas.

Numerosos casos demuestran además, que formas alternativas de dirección, propiedad y gestión también son posibles y prometedoras en el sector financiero. Un ejemplo de ello es la existencia en Suiza de un pequeño banco, eficiente y con dirección transparente: el Banco

Alternativo. Sus bases y su modo de funcionamiento están descriptos en un escueto documento (König 2006). Lo mismo vale para el Sparda Bank Munich, varias veces más grande, que serviría a los militantes de la Economía del Bien Común como modelo para su planificado Banco Democrático (Felber 2010: 50-60, 150f.; ver también www.demokratische-bank.at). Entretanto existen, por otra parte, en Europa y en otras regiones del globo docenas de bancos alternativos y comunitarios, agrupados en la INAISE, creada en Barcelona en 1999. Con determinadas restricciones, en relación a esto puede mencionarse también el sistema de los bancos Raiffeisen. Como los alternativos, estos bancos superaron la grave crisis de 2008 mucho mejor que la mayoría de los bancos privados (NZZ, 19.6.2009 y 8.12.2010).

Un efectivo “control del sistema crediticio es tan decisivo para un orden económico democrático como la cogestión empresarial”, cree Krätke (en: Widerspruch 2008: 13f.), y “la democratización de la economía significa inevitablemente: sacarle el poder a los bancos”. En esto, él llega todavía más lejos al elevar la pretensión de un “traspaso de algunas de sus instituciones centrales a la propiedad pública como las Bolsas, oficinas de *clearing*, agencias calificadoras de rating crediticio, la estatización de numerosos bancos y aseguradoras (y) la reorganización del control financiero (...)”.

Cuando se escuchan semejantes clamores por reformas radicales, enseguida resuenan en los oídos carcajadas cínicas de parte de los círculos dominantes, que pronostican un apocalipsis de presunta dirección de negocios ineficiente y corrupta en caso de que el Estado, con cambios de este tipo, gane influencia masiva en el acontecer económico. A estos críticos debería recordárseles que las mayores catástrofes de los últimos años, décadas y siglos fueron producidas por la incompetencia intelectual, el absoluto fracaso moral, la bancarrota económica y política de justamente aquellas “élites”, que siempre se sintieron llamadas a dirigir los destinos de los pueblos. Ellas apelaron siempre los principios “sagrados” de la economía privada para, una vez tras otra, despreciar y hasta traicionar estos mismos principios —en primer lugar, el de la responsabilidad privada— provocando así enormes desgracias a nivel mundial.

En el caso del gobierno constitucional, de tendencia socialdemócrata de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, hay que buscar con lupa los indicios de una democratización económica y un cambio de las verdaderas relaciones de poder. Algunas pocas se pueden encontrar (Rey 2008: 197-203), pero la política económica y financiera del gran Estado sudamericano permaneció durante los ocho años de su mandato (2003-2010) en manos conservadoras todo el tiempo. Salvo las excepciones ya mencionadas, apenas pudieron reconocerse señales de reformas estructurales. Tampoco el Partido Trabalhista parece pretender un cambio sustancial del balance de poder bajo su sucesora Dilma Rouseff. Ciertamente las pautas directrices liberales y neoliberales tuvieron en este país desde siempre rasgos menos destructivos que, por ejemplo, en la vecina nación Argentina. Pero los datos disponibles sobre la distribución de la riqueza entre la población brasileña hablan con absoluta claridad, a pesar de todos los intentos de redistribución de la riqueza por motivos caritativos o populistas (ver en relación a esto determinadas informaciones reveladoras en Busch 2009: 154, 157, 162).

Querer conseguir un sistema social y económico solidario por el camino violento, desde ya no tendría sentido y serviría sólo como excusa para una intervención brutal de la reacción

conservadora. Un objetivo tan alto sólo puede ser alcanzado con mucha paciencia, trabajo de persuasión de persona a persona y fidelidad absoluta a la idea central de la democracia en su sentido auténtico. De todas maneras en Europa, Norteamérica y Australia no están en discusión cambios subversivos violentos con metas revolucionarias. Después de dos Guerras Mundiales, que fueron impulsadas desde el Viejo Mundo, las estructuras democráticas –al menos así parece– están enraizadas demasiado profundamente como para que se quiera tomar las armas por razones políticas. Por eso en círculos serios y dignos de crédito, las consideraciones estratégicas para cambiar el sistema capitalista descartan los métodos violentos, no consideran la toma del poder como “acontecimiento puntual”, sino como resultado de una transformación ardua en medio de acciones pacientes, duraderas y solidarias en la política, la economía y la práctica social (comparar con Zelik 2011: 103, 111, 113).

El sacerdote y sociólogo belga François Houtart opina que la condición más importante para la instauración de una nueva sociedad debería consistir primeramente en negarle al capitalismo (un concepto que no debería equipararse automáticamente con economía de mercado) la legitimidad de entrada. “No sólo deben condenarse el abuso y los excesos, sino también su lógica interna, porque es la lógica del capitalismo la que lleva a catástrofes sociales en las que millones y millones pasan hambre y deben vivir en la miseria. Al mismo tiempo se debe poner coto a la destrucción de la Naturaleza, que significa destrucción de la vida.” (Ecupress, 13.8.2008)

“La lógica del capitalismo consiste en conseguir y acumular ganancias a corto plazo, sin preocuparse por otros factores. O considerarlos recién cuando ya es muy tarde”, se queja el clérigo, quien es uno de los fundadores del Foro Mundial de Alternativas (el “otro Davos”) y director de la “Liga Internacional por el Derecho y la Libertad de los Pueblos”. Mientras el neoliberalismo domine todavía en Asia y el capitalismo sea visto por la mayoría de las personas como una oportunidad para un cierto desarrollo, las condiciones previas para un cambio radical serían más favorables en América Latina. Porque allí se habría sufrido mayormente la política económica neoliberal como una agresión.